

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2751-2022
CARATULADO : GONZÁLEZ/ESTADO CHILENO-CONSEJO DE
DEFENSA

Santiago, ocho de Febrero de dos mil veinticuatro

VISTOS:

A folio 1, comparece Adil Brkovic Almonte, abogado, mandatario judicial de **JUAN GONZÁLEZ SANDOVAL**, cédula de identidad N° 7.104.059-3, profesor, domiciliado, para estos efectos, en calle San Pio X 2460, oficina 702, comuna de Providencia, Santiago, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, persona jurídica de derecho público, por Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos domiciliados en Agustinas N°1225, piso 4, de la comuna de Santiago.

Funda su pretensión en el relato de su representado, quien expone el contexto previo a su detención, señalando que un grupo de jóvenes de las juventudes socialistas fueron detenidos en el centro de Santiago por realizar una actividad de propaganda política consistente en pegar una pequeña estampilla con el rostro de Salvador Allende, siendo llevados al Cuartel de la Policía de Investigaciones de General Mackenna, donde bajo interrogatorios, torturas físicas y sicológicas, se vieron obligados a involucrar a otras personas que lo incluían a él.

Así, el día 12 de septiembre de 1974, y luego de regresar del Liceo Valentín Letelier donde cursaba la enseñanza media y con sólo 17 años de edad, la PDI llegó a su casa a tomarlo detenido, siendo conducido, junto a un total de 9 detenidos, a los calabozos de un recinto con aspecto de cárcel llamado la "Patilla", donde fueron ubicados en celdas aisladas con puertas



«RIT»

Foja: 1

de barrote, baño (inodoro) interior y cama de tabla suspendida por cadenas, en cuyas dependencias eran sometidos a interrogatorios con aplicación de corriente eléctrica.

Precisa que el día 16 de septiembre de 1974, un grupo de 6 a 8 personas se presentaron a buscar a los detenidos descritos, quienes procedieron a vendarlos con scotch y tenderlos en el pick up de una camioneta Chevrolet con capota bajo la amenaza de guardias, siendo trasladados hasta una casa esquina donde fueron ingresados a una pieza emplazada en el primer piso del inmueble. Menciona que en ese lugar debían dormir en el suelo, permaneciendo ahí hasta finales del mes de septiembre de ese año. Desde ese lugar eran sacados a los interrogatorios que se realizaban a diario en distintas partes de la casa. Seguidamente, describe las características de la referida propiedad, concluyendo que con el tiempo y por distintos testimonios entregados, tuvo la certidumbre de haber permanecido secuestrado en el cuartel secreto de la Dina conocido como "Venda Sexy", ubicado en calle Irán con Los Plátanos, en la comuna de Macul.

En ese lugar fue sometido a varias sesiones de electricidad amarrado, desnudo, y fijado al catre metálico para aumentar el efecto de la corriente con las manos y piernas abiertas. Pormenoriza que después de las sesiones de parrilla, había ocasiones en que era golpeado para aumentar el dolor. Explica que ese recinto de detención era un lugar donde imperaba el terror, llegando los jefes por la mañana en sus autos, y existiendo horarios de actividades estrictos, como si fuera "una oficina", así, se torturaba de 8 a 18 horas, el jefe en la mañana llegaba insultando y golpeando apenas entraba a la pieza donde estaban los detenidos y procedía a elegir los que serían torturados. Esgrime que aún después de tantos años puede sentir y revivir la tensa espera de ser escogido para ser objeto de torturas como recordar el impacto de sentir los gritos de sus compañeros torturados y verlos retornar físicamente destruidos producto de la corriente y los golpes y la nueva e interminable espera del turno para una nueva sesión de tortura.

Continúa exponiendo que alrededor del 24 de septiembre 1974, el grupo de 9 detenidos del cual formaba parte, fueron sacados vendados en dos camionetas Chevrolet, hasta un recinto que después supieron era denominado "Cuatro Álamos" a cargo de la DINA y que era un lugar donde



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

mantenían a los detenidos para su recuperación producidas por las torturas y a la espera de decidir el futuro de los mismos, que hoy se sabe que podía ser su muerte y desaparición o pasar a ser un detenido “reconocido” y ser trasladado a un recinto, que estaba contiguo a “Cuatro Álamos”, denominado “Tres Álamos”, que en ese tiempo estaba a cargo de Carabineros. Llegando a Cuatro Álamos fue ubicado en piezas con dos o tres personas, hasta el sábado 27 de septiembre 1974, día en que fue llamado a viva voz junto a otros detenidos para ser trasladado al recinto contiguo de “Tres Álamos”, donde posteriormente lo pudieron contactar y visitar sus familiares y amigos.

Prosigue relatando que en “Cuatro Álamos” permanecieron en calidad de incomunicados las personas que individualiza, de las cuales nunca más vio y que con el tiempo aparecieron en las listas de los “119 Detenidos Desaparecidos”, lo que hoy es conocido como la Operación Colombo de la DINA.

Finalmente reseña que en “Tres Álamos”, permaneció hasta el 21 de marzo de 1975, día en que fue expulsado del país hacia México, y con prohibición de regresar a Chile, fecha desde la cual nunca retornó.

Enseguida, el letrado realiza un resumen de lo vivido por su representado, indicando que permaneció en condición de secuestrado sin que nadie supiera de su destino durante 15 días entre el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, el recinto secreto de detención de la DINA conocido como la Venda Sexy y Cuatro Álamos, siendo sometido a intensa tortura física y psicológica. Luego, permaneció 6 meses privado de libertad entre el campo de concentración de Tres Álamos, hasta el 21 de marzo de 1975, fecha en que fue expulsado del país con destino a México, debiendo soportar una pena de extrañamiento indefinida, por decisión administrativa, sin que nunca haya sido juzgado por ningún tribunal ni del orden civil o militar.

Afirma que su representado, ha sido reconocido por el Estado a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, como víctima de prisión política y tortura.

Hace presente que la existencia de los recintos secretos de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional, Venda Sexy, Tres Álamos y Cuatro Álamos, como asimismo el carácter de centro de tortura del Cuartel Central



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

de la Policía de Investigaciones de Chile, ubicado en calle General Mackenna, se encuentra plenamente comprobada, como también que en dichos recintos, se aplicaba la tortura de manera sistemática y sin límites, constando así en fuentes abiertas, como el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Página Memoria Viva, reproduciendo lo señalado en la página web “memoria viva”, sobre el recinto secreto de torturas “Venda Sexy”.

En el rubro del daño producido, manifiesta que el perjuicio sufrido por el actor con lo expuesto precedentemente, es la consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, detención y privación ilegal de la libertad, tortura física, psicológica, exilio obligado, todos hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando un daño inconmensurable a su salud mental que se expresa en sufrimiento emocional, angustia, depresión, afectación a la personalidad, dificultades de adaptación en el ámbito de las relaciones personales, familiares, sociales y laborales.

Como fundamentos de derecho invoca los artículos 1º, 5º, 6º, 7º, de la Constitución Política; artículos 2319 y 2329 del Código Civil y tratados internacionales sobre de derechos humanos, citando la Convención de Ginebra, entre otros.

Por dichas consideraciones, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva, aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar al actor, a título de indemnización de perjuicios por el daño sufrido, la suma de **\$200.000.000**, con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, o en su defecto, el monto indemnizatorio que el tribunal estime ajustado a equidad y al mérito de autos, todo con costas.

A folio 8, el Fisco de Chile, debidamente representado por la Procuradora Fiscal (S) de Santiago, contestó la demanda, quien luego de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJVR

«RIT»

Foja: 1

hacer un breve resumen de la misma y de las pretensiones allí consignadas, interpone las excepciones y defensas, que a continuación se exponen.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, afirmando la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

En términos generales, explica la parte demandada, que asumida la idea reparatoria por parte del Estado mediante la dictación de la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas), se han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas (pensión anual establecida por la Ley N°19.992 y Aporte Único de Reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000.-, y gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda); y c) reparaciones simbólicas (establecimiento de Memoriales y Museos referentes a la Memoria y Derechos Humanos, entre otros); citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que avalaría lo anterior como monto suficiente de indemnización, ya que los mecanismos de reparación buscan compensar los daños a fin de no volver a solicitar indemnización de perjuicios por los mismos daños, razón por la que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva, señalando que conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal, prisión política y tortura sufrida, fueron hechos ocurridos hasta marzo del año 1975, y entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, y a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 27 de abril de 2022, la acción se encontraría prescrita, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

En subsidio, opone similar excepción alegando lo establecido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, por haber transcurrido en exceso el plazo de 5 años.

Añade, que no existiendo norma expresa, corresponde aplicar el derecho común, siendo prescriptible la acción para perseguir la responsabilidad civil, debiendo establecerse expresamente su imprescriptibilidad como excepción, lo que no estaría ni siquiera dispuesto en los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile.

En subsidio de las excepciones opuestas, afirma que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. En efecto, esgrime que se deben considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

A folio 12, el demandante evacuó el trámite de la **réplica**, solicitando el rechazo de las excepciones y defensas opuestas por la demandada en su contestación sobre reparación integral, planteando, a su vez, la improcedencia de la excepción de prescripción extintiva, reproduciendo extensa jurisprudencia al efecto. Finaliza refiriéndose al monto demandado, y a la improcedencia del cobro de reajustes e intereses en la forma solicitada por el demandado.

A folio 15, se evacuó la **dúplica**, en la que el Fisco de Chile reitera sus alegaciones expuestas en la contestación, efectuando algunas precisiones sobre las defensas planteadas por el actor en su escrito de réplica.

A folio 17, complementada a folio 23, se dictó la **interlocutoria de prueba**, por el término legal, rindiéndose la que consta en autos.

A folio 35, se citó a las partes para **oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que **JUAN GONZÁLEZ SANDOVAL**, ya individualizado, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, en contra del **FISCO DE CHILE**, ya individualizado, por la suma



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJVR

«RIT»

Foja: 1

de **\$200.000.000** (doscientos millones de pesos), de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, o en su defecto, el monto indemnizatorio que el tribunal estime ajustado a equidad y al mérito de autos, todo con costas, en base a los antecedentes de hecho y de derecho reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

SEGUNDO: Que el demandado contestó la demanda, solicitando su rechazo, en base a las excepciones, alegaciones y defensas que están reseñadas en lo expositivo de este fallo y que se dan por reproducidas en este considerando.

TERCERO: Que los trámites de réplica y dúplica, reiteran los fundamentos de las partes contenidas en la demanda y contestación, respectivamente, agregando lo ahí consignado.

CUARTO: Que la parte demandante a fin de acreditar su pretensión rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

A folio 26:

1.- Copia del Informe emitido por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Capítulo VI, referido a los Recintos de Detención de la Región Metropolitana, sobre el recinto de secuestro y tortura conocido como la “venda Sexy”;

2.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, certificando que el demandante Juan Carlos González Sandoval, ha sido reconocido por el Estado de Chile, como víctima de Prisión Política y Tortura;

3.- Copia del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Capítulo VIII, “Sobre Consecuencias de la Prisión Política y Tortura”, pág. 581- 611;

4.- Evaluación psicológica y de daño moral del paciente Juan Carlos González Sandoval, realizada por psicóloga clínica, Alejandra Repetto Seeger.

II.- Testimonial:

A folio 30, comparecen Eugenio Ambrosio Alarcón García y Agustín Julio Holgado Bloch, quienes previamente juramentados, legalmente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

examinados y sin tachas deponen al tenor de los puntos de prueba fijados a folio 17 y 23, respecto de los cuales son presentados.

QUINTO: Que, por su parte, el Fisco de Chile, en el folio 8, solicitó se oficie al Instituto de Previsión Social, a fin de informar sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que haya obtenido el demandante, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes.

Petición a la cual accedió el Tribunal según resolución de folio 11, acompañándose al Tribunal el siguiente antecedente:

En el folio 14, oficio ORD N°4792/7278, emitido por el Jefe de Depto. Secretaria General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, de fecha 6 de junio de 2022, por el cual se informa que Juan Carlos González Sandoval, Run N°7.104.059-3, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), recibe beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874.

SEXTO: Que del mérito de autos y de los antecedentes individualizados en los motivos cuarto y quinto de la presente sentencia, valorados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 342 y 346 del Código Civil, y artículos 1700 y 1702 del Código Civil, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que el actor **JUAN GONZÁLEZ SANDOVAL**, fue víctima de una detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, cometidos por agentes del Estado, hechos que acontecieron entre el 12 septiembre de 1974, día de su detención, hasta el 21 de marzo de 1975, fecha en que fue exiliado a México, para luego radicarse en Gran Bretaña, lugar donde actualmente reside, esto último, conforme a la testimonial rendida a folio 30, valorada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 N°1 y 426 del Código de Procedimiento Civil;

2.- Que el actor forma parte de la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas” (VALECH I), que elaboró la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número **10.483**.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, lo litigioso lo constituye la procedencia de la indemnización reclamada por el demandante, por concepto de daño moral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJVR

«RIT»

Foja: 1

OCTAVO: Que, previo a abordar el análisis del fondo de la controversia planteada en autos, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de reparación integral, alegada por la parte demandada, por haber sido ya indemnizado el demandante, fundándose en las reparaciones de los perjuicios sufridos por el actor efectuadas por diversos instrumentos, como así también menciona los actos de desagravio de carácter simbólico y los programas de reparación.

Al respecto, es un hecho evidente que el Estado de Chile cometió violaciones a los derechos humanos durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, cuyas víctimas son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación establecidos en la Ley N°19.992.-, que instauró una pensión de reparación y otros beneficios a su favor, ampliada posteriormente por el aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, de la Ley N°20.874.-, y Ley N°19.234 de exonerados políticos, de lo que se concluye que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, su obligación de reparar el mal causado a las víctimas de la violencia estatal y sus familiares expresados tales leyes, cobrando, entonces, aplicación a su respecto la regla de onus probandi consagrada en el artículo 1698 del Código Civil, en el sentido que quien alega la extinción de una obligación, se encuentra en la necesidad de acreditar dicha circunstancia, y, siendo el pago alegado por el Fisco -ya que, desde un punto de vista sustantivo, esta es la finalidad de la “reparación integral” cuya existencia sostiene- un modo de extinguir las obligaciones, consagrado como tal en el artículo 1567 N°1 del Código Civil, corresponde al Fisco probar la efectividad de encontrarse extinguida su obligación, sea a través del pago o de algún otro modo de extinguir las obligaciones, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Sin embargo, de la probanza incorporada legalmente al pleito, no se desprenden elementos de convicción que permitan establecer suficientemente la efectividad de haberse extinguido la obligación reparatoria en cuestión, en lo referido, particularmente, al demandante de este juicio.

A mayor abundamiento, la mentada Ley N° 19.992.-, prescribió en su artículo 1º, lo siguiente: *“Establécese una pensión anual de reparación en*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior”.

Así también, se dispuso en el artículo 4° del mismo texto legal, que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2° de la presente ley, **la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975.**

Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.”

NOVENO: Que, asimismo, habrá que estar a lo expresado en el mensaje presidencial de dicha normativa (N°203-352), de fecha 10 de Diciembre de 2004, en el que se señaló lo siguiente: “Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta la Comisión. En primer lugar dice que tienen que haber medidas institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación, el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.

En segundo lugar, dice que tienen que haber medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de esta terrible experiencia.

Estas medidas, por cierto, y esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, tienen que haber medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas. La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.”

DÉCIMO: Que, en ese mismo sentido, cabe estar al decreto supremo N°1040, publicado en el Diario Oficial de 11 de noviembre de 2003, que creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, de cuyo informe se proponen, entre otras, una serie de medidas divididas en tres categorías: aquellas individuales, dirigidas a las víctimas, que intentan reparar el daño ocasionado; las colectivas, de carácter simbólico, que tienen un mayor efecto sobre la percepción actual y futura de lo sucedido y del juicio social, que buscan garantizar que no se vuelvan a producir hechos de la gravedad que se han documentado; y aquellas referidas a la institucionalidad, para asegurar la puesta en práctica de las medidas, así como la vigencia de los derechos humanos en la convivencia futura de la nación.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, la Ley N°20.874.-, en su artículo 1°, estableció que el aporte único entregado por esta normativa tiene el carácter de una reparación “parcial”.

DUODÉCIMO: Que, por lo demás, en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago (que, como se dijo, es la finalidad a la cual se dirige sustancialmente la “reparación integral” alegada por la parte demandada), como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial, y, en comparación, los mecanismos e instrumentos legales de reparación invocados por el demandado no se ajustan a la norma internacional referida, la cual, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un pleito análogo, que *“la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley”* (Considerando 13° de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en los apartados precedentes, corresponderá desestimar la excepción de reparación integral, opuesta por la parte demandada.

DÉCIMO CUARTO: Que, por otra parte, el Fisco de Chile alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por el demandado en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que *“... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, **la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de***



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. *Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, **si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna**, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito”* (Sentencia de Reemplazo ROL ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de las excepciones de prescripción enarboladas por la parte demandada.

DÉCIMO QUINTO: Que descartadas las alegaciones previas del demandado, en relación a la pretensión del demandante, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

DÉCIMO SEXTO: Que siendo un hecho de la causa que el actor ha sido víctima directa de un delito de lesa humanidad ocasionado por el actuar de agentes del Estado, tal como ha quedado establecido en el fundamento sexto, estos hechos conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas, sufridos por el demandante.

Así las cosas, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Que, ciertamente, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que éstas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual, ningún órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario, debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como del Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el derecho el Derecho Internacional Humanitario.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño moral reclamado por el actor.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJVR

«RIT»

Foja: 1

en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

El daño moral consiste en la lesión a los intereses “extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88).

DÉCIMO OCTAVO: Que, según lo asentado en la motivación sexta, el actor figura calificado como víctima de prisión política y tortura en el informe emitido por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura aparejado a folio 19, por lo que, forzoso es concluir, desde las máximas de la experiencia, que se ha producido una lesión o detrimento en su persona, que afectó su integridad psíquica y libertad personal, sumado al impacto de ser obligado a vivir en el exilio a muy temprana edad, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia; coligiéndose que en virtud de principios internacionales en materia de marras, los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile. Esto último, se ve refrendado con la prueba rendida por el actor e individualizada en el considerando cuarto de esta sentencia, en particular, la evaluación psicológica y de daño moral del Sr. González Sandoval, realizada por psicóloga clínica, Alejandra Repetto Seeger, la cual concluye que existe un daño psicológico profundo, persistente y permanente en él, producto del secuestro, tortura y exilio de que fue objeto a los 17 años, lo que configura un trauma que ha dejado como secuela un estrés post traumático con distintas manifestaciones (como sentimientos de desarraigo y de falta de pertenencia), al cual se les dará pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de un instrumento privado, y que sin perjuicio de provenir de un tercero ajeno al juicio, no fue objetado de contrario, lo que, sumado a la prueba testimonial de autos, que aunque se encuentra incompleta respecto del segundo deponente, lo declarado por el primer testigo produce plena prueba conforme al artículo 384 N° 1 y 426 de nuestro Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la situación psicosocial del actor durante y con posterioridad a la comisión del delito de lesa humanidad de que fue víctima,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJV

«RIT»

Foja: 1

referidas al dolor y angustia sufridos por el demandante como consecuencia de los hechos experimentados por este.

Que de este modo, y teniendo en especial consideración el tiempo en que se restringió la libertad personal del demandante bajo métodos de torturas y apremios ilegítimos, como también al verse obligado a salir al exilio, todo lo cual se tradujo en una alteración de su estado anímico, emocional y cambio radical en su proyecto de vida, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral por él experimentado, teniendo especialmente presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, y los principios de racionalidad y prudencia en la determinación de estas indemnizaciones, fijándose, de este modo, a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado, la suma única y total de **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos), a favor del demandante **JUAN GONZÁLEZ SANDOVAL**.

DÉCIMO NOVENO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la parte demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses corrientes desde que el deudor quede en mora, esto es, desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

VIGÉSIMO: Que, la demás prueba rendida y que no ha sido ponderada, en nada alteran lo precedentemente resuelto.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencido y estimando este magistrado que el demandado ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427, 428 y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1712, 2492 y 2518 del Código Civil; Ley N° 19.992; Ley N°20.874; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJVR

«RIT»

Foja: 1

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, y demás normas pertinentes, **se declara:**

I.- Que **se rechazan** las excepciones de reparación integral y de prescripción deducidas por el FISCO DE CHILE;

II.- Que se **desestiman** las restantes alegaciones de la parte demandada, opuestas en la contestación;

III.- Que **se acoge** parcialmente la demanda deducida, y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile sólo en cuanto a pagar por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma única y total de **\$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)**, al demandante **JUAN GONZÁLEZ SANDOVAL**. Al monto anteriormente señalado, deberán adicionarse los reajustes e intereses consignados en el fundamento decimonoveno precedente;

IV.- Que **se exime** del pago de las costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelare.

Rol N°C-2751-2022.

Pronunciada por **Marcelo Rojas Sepúlveda, Juez Titular**. Anotada en el registro computacional de causas contenciosas para fallo del tribunal.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, ocho de Febrero de dos mil veinticuatro.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DTKXXLJRJVR